



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veinte de noviembre de dos mil veintitrés

Radicado: 05266-31-03-003-2022-00089-03
Decisión: Revoca
Reseña: Una indebida aplicación del artículo 317 del CGP, termina por soportar una gravosa decisión como la de terminar el proceso por desistimiento tácito, lo que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Terminar el proceso luego de que se cumple la carga impuesta, recortar el término legal de inactividad dispuesto en la norma *eiusdem* y dar lugar a la consecuencia de la terminación sin que haya transcurrido el término, son actuaciones que materializan la vulneración indicada.

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra del auto proferido el 4 de octubre de 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, en el que terminó el proceso por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES

1. Ruiz Sánchez & Asociados Propiedad Raíz SAS fue demandada en trámite ejecutivo por el pago de los valores a los que fue condenada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, a título de indemnización por haber vulnerado los derechos que, como consumidores, ostentan los propietarios de los inmuebles que componen el Edificio Babilonia PH.

2. El juzgado de primera instancia libró mandamiento de pago el 4 de mayo de 2022 y ordenó la notificación personal de la demandada.

3. El **25 de julio de 2023** la *a quo* requirió, previo desistimiento tácito al demandante, para que en el término de 30 días “allegue gestión de notificación” en la dirección de domicilio de la sociedad demandada.

4. El **11 de septiembre de 2023** la parte demandante allegó una constancia de envío de notificación en la dirección exigida por el despacho judicial.

5. El **19 de septiembre de 2023** la *a quo* indicó que el requerimiento no se había cumplido en su totalidad porque faltaba una certificación expedida por la empresa de mensajería, por lo que otorgó cinco (5) días a la demandante para traer tal certificación, so pena de aplicar la consecuencia del desistimiento tácito.

6. El **27 de septiembre de 2023** el demandante presentó una constancia de notificación, con el fin de cumplir el requerimiento.

7. El **4 de octubre de 2023** la juez de primer grado terminó el proceso por desistimiento tácito porque la parte demandante no cumplió correctamente con la carga impuesta.

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Alegó que la constancia exigida por el juzgado sí se aportó el 27 de septiembre de 2023. Que, inclusive, la notificación exigida ya se encuentra realizada.

CONSIDERACIONES

El artículo 317 del Código General del Proceso preceptúa: “El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos: 1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el

cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado...”.

Entre otras reglas, la norma *ejusdem* dispone en el literal “c” que: “**Cualquier actuación**, de oficio o a petición de parte, **de cualquier naturaleza**, interrumpirá los términos previstos en este artículo” (Resaltos del Despacho).

En el presente caso, la *a quo* realizó una indebida aplicación del artículo 317 del CGP, que terminó por soportar una gravosa decisión como la de terminar el proceso por desistimiento tácito, lo que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

El requerimiento del 25 de julio de 2023, previo desistimiento tácito, implicaba que el demandante allegara “gestión de notificación” en la dirección del domicilio de la demandada. Esta decisión fue notificada por estados del 28 de julio de 2023. Antes de que se culminara el término de 30 días otorgado para cumplir con el requerimiento, la parte demandante, el **11 de septiembre de 2023** -día 29 del requerimiento-, allegó una constancia de envío de notificación en la dirección exigida por el despacho judicial.

Resáltese que la carga impuesta en el auto del 25 de julio de 2023 fue la de acreditar un “gestión de notificación” dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esa providencia, y la parte actora efectivamente cumplió con la carga que se le impuso; allegó una constancia que acredita gestión en la notificación.

Tal cual el juzgado hizo el requerimiento, se observa la imposición de una carga basada en medios, gestiones, trámite y no un resultado específico. La *a quo* exigió gestión, y eso fue lo que acreditó el actor. La carga impuesta, que

era el supuesto de hecho de la sanción impuesta, se satisfizo y dentro del término otorgado.

En este caso ni siquiera se habla de interrupción del término otorgado, en tanto lo que hubo fue una satisfacción total de lo requerido; una gestión se requirió y, en efecto, el memorial del 11 de septiembre de 2023, eso fue lo que acreditó.

No es relevante ni siquiera determinar si la notificación está efectuada o no para concluir que la consecuencia de la terminación está indebidamente aplicada, toda vez que el requerimiento que soporta la consecuencia no era la notificación per se, sino una gestión. Desde el 11 de septiembre de 2023 está descartada la posibilidad de terminar el proceso con base en el requerimiento del 25 de julio de 2023, en tanto lo requerido estaba satisfecho.

A más de lo anterior, la *a quo* profirió una actuación, el 19 de septiembre de 2023, que termina por evidenciar aún más la indebida aplicación del artículo 317 del CGP que se presentó en este caso; requirió a la demandante para que en el término de 5 días aportara una certificación, so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito, desconociendo con esto el término dispuesto por el legislador en la norma *ejusdem*.

Pese a que hizo alusión a la consecuencia advertida en el auto del 25 de julio de 2023, es inaceptable que hubiese dispuesto como supuesto de hecho el incumplimiento de una carga en un término 25 días inferior al que dispone el artículo 317 del CGP. No solo la carga procesal de acreditar una “gestión” ya estaba cumplida, sino que, además, el término otorgado se redujo significativamente y sin justificación alguna a 5 días, lo que configura no solo un quebrantamiento de la regla, sino una clara vulneración al debido proceso.

Si lo que pretendía el juzgado de primera instancia era que la parte demandante acreditara la notificación, debió requerir a la parte en ese sentido, pero no lo hizo. Y aun si lo requerido fuera la notificación per se y no

“gestiones” -como se hizo-, tampoco había lugar a la terminación del proceso, porque los memoriales del 11 y el 27 de septiembre de 2023 interrumpieron el término legal que se había otorgado; no hay lugar, ni a reducirlo, como se hizo, ni a terminar el proceso antes de que se cumplan los 30 días de inactividad que exige la ley. Ambos aspectos fueron desconocidos por la primera instancia.

En ese sentido, la indebida aplicación del artículo 317 del CGP es evidente; y, por lo tanto, la decisión de terminación debe ser **revocada**, a efectos de que se continúe con el proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión; **RESUELVE: Revocar** el auto proferido el 4 de octubre de 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado; y, en su lugar, se ordena continuar con el trámite del proceso, en virtud de lo expuesto en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase



Martín Agudelo Ramírez

Magistrado